



**Superservicios**

Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



**DNP**

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



GD-F-008 V.9

Página 1 de 12

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010023265 DEL 03/07/2014**

**POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

**II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010008035, del 21 de marzo de 2014 la superintendencia decidió DESCERTIFICAR al municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013:



a) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

b) Reporte al SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de conformidad con los lineamientos expedidos por el gobierno nacional sobre la materia, o de la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, que contenga la propuesta para la concertación de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución, antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados.

## **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010008035 del 21 de marzo de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010008035 se envió citación al señor alcalde del municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, mediante el oficio No. SSPD 20144010163041 del 21 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 28 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010008035, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010191581. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 9 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor WILMAR ROA MALAGÓN, en su calidad de alcalde del municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los Nos. SSPD 20145290204972 del 25 de abril de 2014 y, 20145290209172 y 20145290209802 del 28 de abril mismo año, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010008035.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con los Nos. SSPD 20145290204972 del 25 de abril de 2014 y, 20145290209172 y 20145290209802 del 28 de mayo de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

#### **"Capítulo I**

#### **ARGUMENTOS TECNICOS Y JURIDICOS**

*El marco jurídico que regula el reporte de la información al sistema único de información SUI, se encuentra compilado en un documento elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante el anexo de la Resolución No. SSPD 20101300048765 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2010.*

*Ahora bien, la particularidad del vigencia fiscal a certificar del año 2012 fue la expedición del Decreto 1639 del 31 de Julio del 2013, por medio de la cual se reglamente parcialmente el artículo 4 de la Ley*

1176 del 2007, en cuanto al proceso de certificación de los distritos y municipios y se dictan otras disposiciones y en su artículo 11 deroga expresamente el decreto 1629 del 2012 y a su vez en el artículo 7 ibídem, amplía el cargue de la información a la plataforma [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co) hasta el 30 de Agosto del 2013, dentro de sus particularidades.

De la norma invocada anteriormente y en especial que el Municipio de El Castillo, de acuerdo a sus ingresos y presupuesto se encuentra clasificado en una entidad territorial de categoría 6 y por lo tanto las normas que aplican el procedimiento de certificación anual para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico son las establecidas en el artículo 3 y 5 del Decreto 1639 del 2013, donde contempla o regula los criterios generales y adicionales para las entidades territoriales prestadoras directas de categorías 4, 5 y 6.

Se puede còlegir el acto administrativo objeto de este RECURSO DE REPOSICION, que el Municipio El Castillo cumplió con los criterios generales establecidos en el artículo 3 de la norma citada, pero incumple dos requisitos establecidos en los criterios adicionales establecidos en el artículo 5 de la misma obra y se pueden resumir así:

"Respecto de los criterios adicionales para los prestadores directos, la Superintendencia encontró lo siguiente:

2. En cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, se verificó que el municipio no reportó el acto administrativo municipal mediante el cual se aprobaron las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

4. Referente al aspecto de cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano, el ente territorial no reportó el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo y la solicitud cargada en el SUI suscrita por el Municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, no establece la propuesta de los puntos de muestro para el control y vigilancia de la calidad del agua, tal como lo exige el artículo 5 del Decreto 1639 de 2013, por lo cual se tiene por no cumplido dicho requisito.

Que como se pudo observar una vez analizados todos y cada uno de los aspectos y sus correspondientes criterios, se pudo determinar que el municipio EL CASTILLO, departamento de META, no cumplió con todos los requisitos necesarios para que esta superintendencia expida la certificación a que se refiere el Parágrafo del artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, con las consecuencias establecidas en el artículo 13 del decreto 1040 de 2012.

Por lo expuesto

#### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** DESCERTIFICAR al municipio de EL CASTILLO, departamento de META, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico."

Al respecto me permito invocar fundamentos jurídicos y técnicos establecidos en la normatividad que desvirtúan dicha manifestación o consideración del acto administrativo que DESCERTIFICA al MUNICIPIO EL CASTILLO.

Nótese que el numeral 2 transcrito anteriormente, manifiesta la Superintendencia que el Municipio NO reportó el acto administrativo municipal mediante el cual se aprobaron la tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y de aseo, al respecto debo manifestar que una vez revisado dicho argumento con el equipo técnico de cargue de información a la plataforma [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co), se observa claramente en las imágenes que anexo a este documento que la entidad que administra esta plataforma NO HABILITO el formato de cargue y conforme lo ordenado en el artículo 9 de decreto 1639 del 2013 ordena:

"**REPORTE DE INFORMACION:** Los municipio y distritos deberán reportar la información requerida para el proceso de certificación a través del Sistema Único (sic) de Información - SUI o del Formato Único (sic) Territorial - FUT." (Negrillas y subrayado propio)"

Se colige de la norma citada anteriormente, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como la autoridad que administra la plataforma [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co) a través de la cual se reportara toda la información requerida para el proceso de certificación NO HABILITA dicho formato o cargue para que el Municipio cargue la información necesaria requerida para obtener la certificación correspondiente, induciendo en un error u omisión al no permitir a través del instrumento idóneo y del cual dispuso la normatividad para reportar la información.

Revisado históricamente en la plataforma [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co), se observa que únicamente en el año 2009 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios HABILITO dicho CARGUE MASIVO y como se observa en las imágenes a continuación.

(Se adjuntan los pantallazos de los formatos habilitados para el cargue de información del municipio de El Castillo para la vigencia 2009 y 2012).

En consecuencia, no se puede trasladar a la entidad territorial el error presentado en la plataforma que administra la autoridad de control y vigilancia en atención que la única forma de reportar dicha información es a partir de la plataforma de Sistema Único de Información - SUI, por mandato del decreto 1639 del 2013 artículo 9.

Es válido manifestar que para la vigencia del año 2009 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios DESCERTIFICÓ para dicha vigencia fiscal al MUNICIPIO EL CASTILLO, en atención a la falta de cargue dicho ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE TARIFAS y volverlo a efectuar bajo este mismo cargo estaría incurriendo la entidad de control y vigilancia en doble castigo por un mismo hecho y para ello me permito invocar como fundamento jurisprudencial el pronunciamiento efectuado por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 632 DEL 2011, corporación que sostuvo:

**" PRINCIPIO NON BIS IN IDEM- Características**

La Corte hizo un recuento de las características que gobiernan la prohibición del doble enjuiciamiento, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera: (i) El principio del non bis in Idem tiene el carácter de derecho fundamental de aplicación directa e inmediata, y con él se busca "evitar que las personas sean sometidas por el Estado a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a partir de un mismo comportamiento, colocándolas en estado de absoluta indefensión y de continua ansiedad e inseguridad (ii) Su importancia radica en que, "cualquier individuo puede tener la confianza y la certeza de que las decisiones definitivas dictadas en su contra, fruto de los procesos que definen su responsabilidad en la comisión de conductas contrarias a derecho, realizan la justicia material en cada caso concreto e impiden que tales comportamientos ya juzgados puedan ser objeto de nuevos debates sin distinta fórmula de juicio". (iii) El fundamento de su existencia son los principios de seguridad jurídica y justicia material, los cuales a su vez se amparan en el principio de la cosa juzgada, por cuyo intermedio se le reconoce carácter definitivo e inmutable a las decisiones judiciales ejecutoriadas, impidiendo "que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior (iv) Teniendo en cuenta el ámbito de protección, el non bis in Idem no solo se dirige a prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la expresión "juzgado", utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión, (v) La prohibición del doble enjuiciamiento se extiende a los distintos campos del derecho sancionador, esto es, a todo régimen jurídico cuya finalidad sea regular las condiciones en que un individuo puede ser sujeto de una sanción como consecuencia de una conducta personal contraria a derecho. Así entendida, la cita institución se aplica a las categorías del "derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (Impeachment) y el régimen jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)", (vi) El principio del non bis Idem le es oponible no solo a las autoridades públicas titulares del ius puniendi del Estado, sino también a los particulares que por mandato legal están investidos de potestad sancionatoria. De manera particular, y dada su condición de garantía fundamental, al Legislador le está prohibido expedir leyes que permitan o faciliten que una misma persona pueda ser objeto de múltiples sanciones o de juicios sucesivos ante una misma autoridad y por unos mismos hechos, (vii) Conforme con su finalidad, la prohibición del doble enjuiciamiento, tal y como ocurre con los demás derechos, no tiene un carácter absoluto. En ese sentido, su aplicación "no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y finalidades", (viii) Así entendido, el principio non bis in Idem no impide que "una misma conducta sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria". Desde este punto de vista, el citado principio solo se hace exigible cuando, dentro de una misma área del derecho, y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo comportamiento. (negritas y subrayado propio)

Con el fin de refutar los argumentos, el Municipio El Castillo si cuenta con el acto administrativo que adopta la estructura tarifaria para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; esta fue expedida mediante la Resolución No. 011 de Enero 27 de 2012 (anexo 3folios), quiere decir ello que la entidad territorial al momento de solicitar el acto administrativo en la plataforma SUI ya estaba creado y cuyo acto administrativo goza de todas las presunciones de legalidad, por ende no existe incumplimiento en el criterio adicional por dos razones fundamentales de peso, i) el acto administrativo si existe al momento que se genera la obligación de cargarlo y ii) en el sistema único de información el cargue masivo no se encontraba HABILITADO para cargarlo,

En relación a lo argumentado en el numeral 4 del acto administrativo objeto de este recurso, en la cual se sostiene que el municipio EL CASTILLO no reporto el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo y la solicitud cargada en el SUI. Debo señalar que en la plataforma [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co) tampoco se encontraba habilitado en el tópico técnico del servicio de acueducto del cargue masivo para la vigencia fiscal del año 2012 denominado 'actas de concertación de puntos y lugares de muestreo', en virtud a lo ordena el anexo de la resolución compilatoria No. SSPD 20101300048765 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2010, en su artículo 6.4.3.6 FORMATO. ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGO 1, 2, 3 Y 4 El prestador deberá anexar en formato pdf o tif, copia del acta de concertación de la ubicación de los puntos de muestreo, realizada con la autoridad sanitaria competente.

Artículo 6.4.3.7 FORMATO. ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO - RANGO 1, 2, 3 Y 4 La primera vez que se habilita este formato depende de la certificación en SUI del formulario o formato registro de puntos de muestreo, a partir del año siguiente y para cada año, se habilita nuevamente de acuerdo al diligenciamiento del formulario actualización de puntos de muestreo y en este debe registrarse el acta de actualización de los puntos de muestreo que se encuentran vigentes para el año de reporte.

Por lo argumentado anteriormente, se puede deducir fácilmente que el formato HABILITADO para reportar el cargue masivo dentro del tópico técnico del servicio de acueducto ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 y 4, el cual debidamente certificado como se observa en la siguiente imagen:

(Se adjuntan los pantallazos de los formatos habilitados para el cargue de información del municipio de El Castillo para la vigencia 2012).

En la imagen se observa claramente que el documento fue certificado dentro de la oportunidad señalada en el decreto 1639 del 2013. Por lo tanto se colige fácilmente que los criterios adicionales argumentados como incumplidos si fueron efectuados por el MUNICIPIO EL CASTILLO y en consecuencia la entidad de control y vigilancia debe reponer el acto administrativo objeto de este recurso.

Por los argumentos jurídicos y técnicos traídos a colación, solicito:

## Capítulo II

### PRETENSION:

REPONER la decisión tomada mediante el acto administrativo Resolución No. SSPD 20144010008035 DEL 21-03-2014 y como consecuencia de ello CERTIFICAR al MUNICIPIO EL CASTILLO, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico."

### 3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documentos radicados con los Nos. SSPD 20145290204972 del 25 de abril de 2014 y, 20145290209172 y 20145290209802 de 2014, por medio de los cuales se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Documento de posesión del señor Roa como alcalde municipal de El Castillo-Meta para el periodo 2012 – 2015, ante la Notaria de Granada – Meta.

3.3.2. Documento proferido por la comisión escrutadora municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual declara que WILMAR ROA MALAGÓN fue elegido alcalde municipal del municipio de El Castillo, Meta para el periodo 2012 – 2015.

3.3.3. Copia de la cédula de ciudadanía del señor WILMAR ROA MALAGÓN.

3.3.4. Copia de la Resolución No. 011 del 27 de enero de 2012 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA TARIFARIA Y EL PLAN DE TRANSICIÓN TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS SERVICIOS -PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO – META" emitida por el alcalde municipal.

3.3.5. Copia del "ACTA MEDIANTE LA CUAL LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META RECIBE LOS PUNTOS OFICIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA ANALISIS DE LABORATORIO" suscrita el 1 de marzo de 2012 entre el señor WILMAR ROA MALAGÓN en representación del municipio de El Castillo, y el técnico operativo de saneamiento ambiental de la Secretaría Seccional de Salud del departamento del Meta.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón al recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio: Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas.** Frente a este criterio alega el municipio que la superintendencia indujo a error al municipio al no habilitar el cargue del acto de aprobación de tarifas, puesto que el reporte al SUI es el instrumento idóneo para cargar la información exigida por la Ley.

En cuanto a las consideraciones expuestas por el recurrente, sobre la no habilitación del formato que imposibilitó el cargue oportuno de la información exigida para obtener la certificación en SGP – APSB, este Despacho considera pertinente señalar que mediante la Resolución No. SSPD – 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, esta superintendencia expidió “la Resolución Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema Único de Información - SUI de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035”, y reglamentó entre otros aspectos, lo relacionado con el cargue de la información de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo al “Sistema Único de Información”-SUI.

Respecto del formato de acto de aprobación de tarifas, la Resolución señalada dispuso: “FORMATO. ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS. El prestador deberá remitir a esta Superintendencia a través de la página Web [www.sui.gov.co](http://www.sui.gov.co) en formato pdf o tif, copia del acto por medio del cual la entidad tarifaria local adopta el estudio de costos y tarifas del servicio de Alcantarillado, si es el mismo para los tres servicios debe reportarlo igualmente en los servicios de acueducto y aseo”. Los formatos antes mencionados se encuentran señalados en los artículos 6.3.3.2., 7.3.3.2. y 8.3.3.5. del Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765, dicho reporte al SUI se debe realizar cuando la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, al día calendario siguiente a su expedición.

Revisado el SUI, se encontró que el municipio de El Castillo tiene 4 formatos para reportar el acto de aprobación de tarifas para el servicio de aseo, 1 para acueducto y 1 para alcantarillado, todos ellos pendientes de certificar, tal como se evidenciar a continuación:

AÑO	NOMBRE DE LA EMPRESA	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACIÓN
2006	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ASEO	Comercial y de Gestión	ANUAL	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Pendiente	2006-04-30 00:00:00	
2007	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ASEO	Comercial y de Gestión	ANUAL	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Pendiente	2006-04-30 00:00:00	
2009	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ACUEDUCTO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF	Pendiente	2010-04-30 00:00:00	
2009	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ALCANTARILLADO	Comercial y de Gestión	EVENTUAL	EVENTUAL 0	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILLADO PDF	Pendiente	2010-04-30 00:00:00	
2009	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ASEO	Comercial y de Gestión	ANUAL	Anual	ACTO APROBACION DE TARIFAS (PDF o TIFF)	Pendiente	2010-02-28 00:00:00	
2012	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ASEO	Comercial y de Gestión	ANUAL	Anual	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ASEO PDF	Pendiente	2013-02-28 00:00:00	

Tal como se puede observar, desde el 2006 el municipio tenía habilitado dicho formato en el SUI, además, se le recuerda al recurrente que el acto de aprobación de tarifas no se expide cada año, por lo tanto, debe reportarse en el formato que se encuentre habilitado en el SUI y en el caso en que se expida un acto que revoque el reportado en el SUI, lo que procede es solicitar la reversión del mismo al Grupo SUI de esta superintendencia.

Es evidente que el municipio si contaba con el formato habilitado en el SUI, antes del 30 de agosto de 2013, para que reportara la Resolución No. 11 del 27 de enero de 2012, con la cual adoptó las tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que allegó con el recurso de reposición.

Ahora bien, no es de recibo el argumento expuesto por el municipio, según el cual, no puede predicarse un incumplimiento de su parte porque no estaba habilitado el formato para cargar el acto de aprobación de tarifas y el supuesto error en el que indujo la Superservicios al municipio de El Castillo, dado que la

entidad territorial contaba con las herramientas que le permitían subsanar las dificultades que pudieran afectarlo en el cargue de la información al SUI.

De otro lado, para que los planteamientos esgrimidos por el recurrente fueran tenidos como eximente de responsabilidad, debían enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definido por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: *"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público"*.

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra *"De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil"*, Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

*"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias."*

*El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto. Un hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a costas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."*

De la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.
- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

En el caso particular la superintendencia advierte que de conformidad con el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, los municipios tenían como plazo para reportar la información requerida para obtener la certificación en SGP – APSB de la vigencia 2012, hasta el 30 de agosto de 2013, es decir que el municipio contó con un lapso de tiempo mínimo de 8 meses para cargar la información señalada en la normativa vigente, o en su defecto para solicitar la habilitación de los formatos para realizar los cargue de la información puesto que, dado que la información a reportar corresponde a la del año 2012, el municipio podía reportar la información al SUI desde el primero de enero hasta el 30 de agosto de 2013.

Por lo anterior la entidad encuentra que en efecto:

- No se configura un hecho irresistible o imprevisible puesto que el cargue de la información al SUI es una obligación de los municipios consagrada en la Ley 1176 de 2007, en el Decreto 1040 de 2012 y en el Decreto 1639 de 2013, por lo cual las entidades territoriales tienen pleno conocimiento de estos procesos administrativos adelantados por la superintendencia.

- Los hechos constitutivos como eximentes de responsabilidad no constituyen una situación de caso fortuito o fuerza mayor.

- El obstáculo invocado por el municipio para el incumplimiento de sus obligaciones legales, constituye una dificultad susceptible de ser superada, puesto que durante mínimo ocho meses el municipio contó con la posibilidad de utilizar las herramientas informáticas previstas por el SUI para superar cualquier dificultad en el cargue de la información.

- Revisadas las mesas de ayuda generadas por el municipio de El Castillo del departamento del Meta relacionadas con el cargue del acto de aprobación de tarifas y del acta de concertación, se encontraron las siguientes solicitudes:



(i) Solicitud N°. 281107 BC del 27 de diciembre de 2013, mediante la cual el solicitante señaló: "Buenos días, en múltiples ocasiones he tratado de certificar el formulario año 2012 para aseo y alcantarillado: prestación directa del servicio publico por parte del municipio, sale el anuncio que la validación fue exitosa, pero al tratar de certificar aparece el siguiente error:

Error en la aplicación

No se pudo radicar el formulario: Error al almacenar tupla: ORA-02290: restricción de control (SUI\_ALCALDIAS.CK3\_PRESTA\_DIRECTA\_MCPIO\_ACU) violada

Agradezco su colaboración

CAMILO ENRIQUE HURTADO"

(ii) Solicitud N°. 281105 BC del 27 de diciembre de 2013, mediante la cual el solicitante señaló:

"Buenos días, en muchas ocasiones se ha intentado hacer el cargue año 2012 para alcantarillado y aseo de el formulario: Prestación directa por parte de el municipio, sale el siguiente error:

Error en la aplicación

No se pudo radicar el formulario: Error al almacenar tupla: ORA-02290: restricción de control (SUI\_ALCALDIAS.CK3\_PRESTA\_DIRECTA\_MCPIO\_ACU) violada

Agradezco su atención."

(iii) Solicitud N°. 281034 BC del 26 de diciembre de 2013, mediante la cual el solicitante señaló:

"BUENOS DIAS, EN EL CAGUE MASIVO PARA ASEO DE FACTURACION DE ASEO JUNIO AÑO 2012 PARA EL MUNICIPIO DEL CASTILLO, POR ERROR SE DILIGENCIO COMO FORMATO NO APLICA, SOLICITAMOS SE REVERSE ESTA CARGA PARA PODER SUBIR LA INFORMACION DEL CARGUE DE LO FACTURADO PARA EL MES DE JUNIO DE 2012.

MIL GRACIAS"

(iv) Solicitud N°. 275137 BC del 24 de septiembre de 2013, mediante la cual el solicitante señaló:

"Buenas tardes, en formularios técnicos para el servicio de aseo de el municipio de el castillo se encuentra habilitado SITIOS DE APROVECHAMIENTO, el cual no puede diligenciarse por que el municipio no tiene estos sitios, que se necesita para deshabilitar dichos formularios, ya que los Items que hay para formato no aplica no pueden seleccionarse por que no corresponde ni a información no capturada ni a perdida de información.

mil gracias "

(v) Solicitud N°. 273830 BC del 3 de septiembre de 2013, mediante la cual el solicitante señaló:

"Buenos días, tengo inconvenientes al cargar el formulario Empresas prestadoras en el Municipio, para el municipio del Castillo-Meta, me sale el siguiente error:

Problemas certificando reporte: ORA-06502: PL/SQL: error : buffer de cadenas de caracteres demasiado pequeño numérico o de valor ORA-06512: en "SUI\_ALCALDIAS.COSTOS\_Y\_TARIFAS", línea 615 ORA-04088: error durante la ejecución del disparador SUI\_ALCALDIAS.COSTOS\_Y\_TARIFAS ORA-06512: en "SUPERSPD.ACTUALIZA\_SI\_RADICA", línea 263 ORA-04088: error durante la ejecución del disparador SUPERSPD.ACTUALIZA\_SI\_RADICA

Agradezco su colaboración."

(vi) Solicitud N°. 273618 BC del 30 de agosto de 2013, mediante la cual el solicitante señaló:

"BUEN DIA TENEMOS UNA DIFICULTAD EN EL CARGUE DE LA CARTA DE INTENCION DE PUNTOS DE MUESTREOS EN EL TOPICO DE SGP - CERTIFICACIONES - ALCALDIA EN ATENCION QUE EL DOCUMENTO UNICAMENTE SE PUEDE ANEXAR Y CARGAR PERO NO LO DEJA CERTIFICAR, EL MODULO NO LE OTORGA AL USUARIO DICHA OPCION.

QUEDAMOS PENDIENTE DE SE VERIFIQUE DICHA INCONSISTENCIA Y SE PUEDA SOLUCIONAR A EFECTOS DE CARGAR EL DOCUMENTO DE CARTA DE INTENCION DE PUNTOS DE MUESTREOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2012.

LO ANTERIOR DENTRO DEL PLAZO OTORGADO POR EL DECRETO 1639 DEL 2013"



A partir de la lectura de las solicitudes presentadas por el municipio de El Castillo – Meta, se puede concluir que (i) la Alcaldía Municipal si conocía el procedimiento de la mesa de ayuda para efectos de solicitar apoyo en el cargue de la información al SUI, (ii) que acudió a esta herramienta para efectos de reportar la información que no había cargado para efectos de obtener la certificación en la administración de recursos provenientes del SGP – APSB vigencia 2012, una vez expirado el plazo para reportar la información, y (iii) el formato para reportar el acto de aprobación de tarifas se encontraba habilitado en el SUI desde el 2006.

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que para que los argumentos del recurrente sean tenidos en cuenta como hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debió demostrarse la ocurrencia de estos y la proporción en que influyeron para la determinación de una exoneración de responsabilidad por parte del alcalde municipal.

Sin lugar a dudas, los hechos que aduce el recurrente no se configura en hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que los mismos no hacían imposible el cumplimiento de los criterios en mención.

Ahora bien, es claro que el municipio al 30 de agosto de 2013 contaba con el acto de aprobación de tarifas (Resolución No. 11 del 27 de enero de 2012), sin embargo, y dado que el mismo no fue reportado en el SUI, no es posible tener en cuenta dicho documento para acreditar el cumplimiento del criterio objeto de estudio.

Al respecto esta superintendencia se permite recordar que el Decreto 1639 de 2013, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los requisitos tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

Pues bien, partiendo de que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*, tal como se examinó anteriormente, el municipio no reportó al SUI el acto de aprobación de tarifas.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así<sup>1</sup>: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

*(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."*

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013 para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de El Castillo.

Es necesario aclarar que, según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales. Sobre este tema la Corte se pronunció<sup>2</sup> y aclaró lo siguiente:

*"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas*

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C -1512 del 8 de noviembre 2000. MP Alvaro Tafur Galvis

adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas (...)"

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5º de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no hubiera reportado al SUI la información señalada en el Decreto 1639 de 2013 hasta el 30 de agosto de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Frente al argumento del recurrente según el cual la superintendencia está incurriendo en un doble castigo al descertificar al municipio por el incumplimiento del requisito correspondiente al cargue del acto de aprobación de tarifas, puesto que por este mismo criterio el municipio había sido descertificado en la vigencia 2009, se aclara lo siguiente:

El principio *NON BIS IN IDEM* que rige el derecho fundamental al debido proceso en la legislación colombiana, ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en los siguientes términos:

*"Este principio implica que el Estado se halla legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurre prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez tomada una decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión. En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates. (.....) La función que cumple el non bis in idem, ha dicho la Corte, radica en "evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una persona por la conducta por él realizada, lo cual colocarla a dicha persona en la situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. (.....) Al interpretar el alcance de la garantía constitucional, la jurisprudencia colombiana ha precisado que un mismo supuesto fáctico puede eventualmente llevar a dos consecuencias negativas para la misma persona, pero advirtió que se vulnera el non bis in idem cuando se presenta una triple identidad (objeto, causa y persona) (....) "La identidad en la persona significa que el sujeto inculpatado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole". "La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza". "La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos".."(...)"*

A partir del anterior desarrollo jurisprudencial se puede advertir sin lugar a dudas que:

(i) El principio resulta aplicable a procedimientos penales, disciplinarios o en general procesos sancionatorio, y el proceso al que el recurrente hace referencia tiene la naturaleza de un trámite administrativo para determinar quién es el competente para la administración de los recursos provenientes del SGP - APSB, sin que medie una sanción a una persona individualizada, y en donde se analicen elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad respecto de su comportamiento, característicos de los procesos sancionatorios.

(ii) La aplicación de este principio requiere la acreditación de la triple identidad de objeto, sujeto y causa. En cuanto al requisito del objeto se aclara que cada proceso de certificación es independiente, puesto que el análisis que anualmente realiza la superintendencia de los requisitos para certificar o descertificar a los municipios en SGP - APSB, corresponde a una vigencia determinada y concreta, y por ello en análisis que a la postre realice la superintendencia en otra vigencia, de ese mismo requisito, debe entenderse que se realiza en el marco de un trámite administrativo autónomo de los anteriores. En este punto el Decreto 1040 de 2012 estableció:

*"Artículo 11. Plazos y procedimientos. Para efectos del proceso de certificación anual, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en los artículos 9º y 10 del presente decreto, con base en los criterios e indicadores de cumplimiento que para cada año defina el Gobierno Nacional teniendo en cuenta las categorías de los municipios y distritos. " Negrilla fuera de texto.*

Esta norma genera para la Superintendencia de Servicios Públicos, la obligación de analizar en cada proceso de certificación, los requisitos que deben reportar los municipios, es decir, que cada año se debe realizar un análisis nuevo e integral mediante el cual la entidad determine si el municipio cumplió o no con los requisitos para ser certificado en la administración de los recursos de SGP – APSB, y como resultado de ello no son admisibles los argumentos del recurrente en el sentido de invocar una vulneración del principio *NON BIS IN IDEM* con la expedición de la Resolución impugnada, aunado a lo anterior, se aclara al recurrente que para el proceso de certificación adelantado en la vigencia 2009, el municipio fue CERTIFICADO, tal como se encuentra señalado en la Resolución No. SSPD 20145290209802 del 18 de agosto de 2009; lo anterior desvirtúa el hecho que esta superintendencia descertificó en dos proceso al municipios por el incumplimiento en el reporte al SUI del acto de aprobación de tarifas.

Con fundamento en lo expuesto, se confirma que este criterio no lo cumplió el municipio.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio: Reporte al SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de conformidad con los lineamientos expedidos por el gobierno nacional sobre la materia, o de la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente. Al respecto, el recurrente señala que debido a que no tenía habilitado el formato “actas de concertación de puntos y lugares de muestreo” en el SUI, reportó este documento en el formato “acta de actualización de la concertación de puntos de muestreo rango 1, 2, 3 y 4”.

Por lo anterior, revisando el SUI se encontró que el municipio no reportó en los formatos que tenía en el SUI habilitados para cargar el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo, así

Alcaldía	Año	Periodicidad	Período	Formato			Aplicación	Estado	Acto	Fecha de Certificación
ALCALDIA META-EL CASTILLO	2008	Anual	1	ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO (RESOLUCIÓN 811 DE 2008) PDF			Cargue Masivo	PENDIENTE	586	
AÑO	NOMBRE DE LA EMPRESA	SERVICIO	TOPICO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	ESTADO	ACTO	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACIÓN
2009	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ACUEDUCTO	Técnico operativo	ANUAL	Anual	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1 (PDF o TIFF)	Pendiente	Resolución SSPD 20101300048 765	2010-01-16 00:00:00	

Por lo anterior, se desvirtúa lo señalado por el recurrente en el sentido de no tener habilitados en el SUI los formatos para reportar el documento objeto de estudio en éste acápite, que se expide una solo vez y debe ser actualizado periódicamente por el municipio y la autoridad sanitaria.

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado por el recurrente se procedió a revisar el formato “ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4” del SUI, observando que el 13 de agosto de 2013 el municipio reportó el acta mediante el cual “la Secretaria Seccional de Salud del Meta recibe los puntos oficiales para la toma de muestras de agua del acueducto municipal para análisis de laboratorio” suscrita el 1 de marzo de 2012, en ella se relacionan 5 puntos para la toma de muestras, así:

ACTAS CALIDAD DEL AGUA									
Año					2012				
Departamento					META				
Municipio					EL CASTILLO				
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	D	EMPRESA	FORMATO			URL	FECHA DE CERTIFICACION	
META	EL CASTILLO	573	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4			Resolución de muestreo 2012.pdf	2013-08-13 17:30:08	

**ACTA MEDIANTE LA CUAL LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL  
META RECIBE LOS PUNTOS OFICIALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE  
AGUAS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA ANALISIS DE LABORATORIO**

Entre los suscritos a saber: Wilmar Roa Malagón  
identificado con cédula de ciudadanía No. 39.509.451  
quien obra en representación del Municipio de El Castillo - Meta  
del municipio de El Castillo - Meta con NIT. 892.099.238-2  
y Daniel Rocha Acosta identificado con cédula de ciudadanía  
No. 13.321.661 quien obra como Técnico Operativo de  
Sanpamiento Ambiental, autoridad sanitaria en el municipio de  
El Castillo - Meta quienes mediante esta acta final de  
recibo a conformidad entregan y reciben oficialmente los puntos de toma de  
muestras de la red de distribución del sistema de acueducto de  
la zona Urbana de El Castillo de conformidad con el Decreto 1575 del  
09 de mayo de 2007 y Resolución reglamentaria No 0811 del 5 de marzo de 2008.

Nombre y código de la localidad, del municipio y del departamento según el DANE  
Departamento: Meta, Código DANE: 50281

Nombre de la persona prestadora: Municipio de El Castillo - Meta

NIT de la persona prestadora: 892.099.238-2

Constancia Registro Único de Prestadores de Servicios - RUPS y fecha de registro

Teniendo en cuenta que el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo, fue reportado en el SUI antes del 30 de agosto de 2013 y cumple con las exigencias del presente proceso de certificación, lo que le permite a esta superintendencia, siguiendo los principios generales del derecho, proceder a ordenar el cumplimiento del criterio que se analiza.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito correspondiente al reporte del acto de aprobación de tarifas de los servicios públicos que presta directamente para la vigencia 2012, advirtiéndole que logró acreditar el criterio relacionado con el reporte en el SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo, por lo tanto el recurso formulado por el señor WILMAR ROA MALAGÓN como alcalde municipal de EL CASTILLO, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. 20144010008035 del 21 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de EL CASTILLO, del departamento de META, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de META, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Juan Leonardo Álvarez Arévalo - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Matha Lucia Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094015208380749A